



parentesis

Especial
**Fut-bol:
Razón
de Estado**



Puntos de vista
En defensa
de los derechos
humanos

Signos de recesión



Cultura
Arte directo
a Nueva York



Siempre vivas
Aguas con Chapala



Primera vez
Horacio Romero,
dramaturgo

Se abre (...
Lema de Bartlett:
"Educar
en la pobreza"

En la administración de justicia, tortuguismos y escasos recursos



Foto: Juan Carlos Magallán

Los primeros tres años y medio de gestión del presidente Miguel De la Madrid transcurrieron de manera simultánea a su propósito de que México obtuviera la sede para organizar la Copa FIFA en 1986. La nueva administración asumió el cargo en diciembre de 1982 y la decisión de solicitar para el país dicho certamen se hizo oficial en marzo del año siguiente: meses antes de acceder a la Primera Magistratura, como candidato por el partido del gobierno y por ello obligado vencedor, De la Madrid era calificado por analistas diversos desde opciones políticas diferentes como en futuro "presidente de la crisis"; señalaban que a él correspondía hacerle frente y administrarla. Durante su campaña electoral había palpado la gravedad de la situación económica y social que aquejaba a la mayoría de sus compatriotas. 1982 se significó por la agudización de los problemas nacionales hasta límites sin precedente en la historia moderna de la República. El proceso de industrialización a toda costa seguido por los gobiernos a partir de 1940, centrado en el mecanismo de sustitución de importaciones, logró un crecimiento económico importante pero su dinámica no se correspondía, ya, con la reestructuración del capitalismo y del mercado mundiales en una fase caracterizada por la transnacionalización de la economía, las nuevas tecnologías y el papel asignado a cada pueblo en el ámbito internacional. (1) La crisis que se manifestó en toda su agudeza desde 1982 no era como pensaban los funcionarios encargados de las finanzas nacionales, incluso el presidente José López Portillo, de índole pasajera, sino estructural en la medida en que ponía en tela de juicio las bases de valorización del capital.

En su recorrido por la nación a efecto de conseguir sufragios, De la Madrid fue presionado por los reclamos populares a reconocer abiertamente que la desigualdad ancestral había adquirido tintes dramáticos. Una vez electo, al anunciar sus objetivos de "reordenación económica" y de "cambio estructural" para el país, se puso de manifiesto que el Estado y el gran capital deberían modernizar el aparato productivo en aras de incrementar la capacidad generadora de ganancia. Expuso la urgencia de convertir a México en exportador de productos terminados para que no continuara rezagado en su rol tradicional de exportador primario. (2) Inclusive para los voceros oficiales era paradójico el severo desajuste y deterioro financiero, cuando poco tiempo antes se hacía un llamado a los mexicanos con el fin de que aprendieran a vivir en abundancia proporcionada por el auge de las exportaciones petroleras: desde mediados de 1979 la venta de hidrocarburos generaba 1200 millones de dólares cada mes. Sin embargo la bonanza no se aprovechó para resolver problemas

Futbol: "Razón de estado" y negocio

Crisis nacional: la herencia de López Portillo

Primera de tres partes

GILBERTO FREGOSO PERALTA

sociales añejos como el desempleo, la desnutrición, el déficit de vivienda, los bajos ingresos salariales, la deuda externa enorme, la planta industrial obsoleta, los servicios médicos asistenciales; negligencia que puso en entredicho la capacidad de rectoría económica gubernamental. En cambio, la fuga de capitales entre 1981 y 82 se calculó en 28 mil millones de dólares, la más alta del mundo. (3) La remisión de riqueza al extranjero, en buena medida como muestra de corrupción, dejó sin sustento cualquier expectativa de desarrollo con recursos propios, pues a lo anterior habría de añadir los poco más de 24 mil millones de la divisa estadounidense correspondientes al pago de intereses del débito externo (1981 y 82), circunstancias que implicaron un creciente desequilibrio del gasto público y la contratación de grandes empréstitos con la banca mundial. Algunos indicadores significativos muestran con elocuencia lo ocurrido en 1982 y permiten entender (que no aceptar) las medidas adoptadas por De la Madrid, entre ellas la concerniente a que el país se hiciera cargo de la competencia futbolística:

recibir nada más 15,500, contingencia que incidió en una gran merma presupuestal no programada. La especulación desbordada contra el peso mexicano repercutió en el descenso de la inversión productiva real del 16% conferencia al año anterior. La política alimentaria fincada en el Sistema Alimentario Mexicano (programa aplicado durante el sexenio 76-82), no se vio coronada por el éxito pues se importaron ocho millones de toneladas de básicos durante ese último año.

Con la reserva de divisas agotada, el estado enfrentó el compromiso de hacer efectivo el pago de los intereses de la deuda con el exterior, además de continuar garantizando la convertibilidad de pesos en dólares para la remisión de utilidades de la inversión foránea. Ante la inminencia del colapso financiero, en agosto de 1982 el gobierno firmó una Carta Compromiso con el Tesoro norteamericano mediante la cual México se obligó a vender cuarenta millones de barriles de oro negro a precios controlados, a cambio de mil millones de dólares entregados de inmediato como "ayuda" para resolver la "contingencia de



del 83, un legado adicional para la siguiente administración. De manera simultánea, México se comprometió a realizar sus mejores esfuerzos con el objetivo de renegociar su deuda externa y lograr que las pláticas con el FMI llegaran a una pronta y exitosa solución, de tal suerte que el organismo financiero otorgara un paquete de emergencia antes de dos meses. En desmedro de su soberanía, el convenio implicó que tanto Hacienda como el Banco Central proporcionarían al Tesoro estadounidense una información completa y oportuna sobre toda decisión relativa a política económica que quisiera aplicar en el país. Después de un año las conversaciones con el FMI, ríspidas y difíciles, concluyeron al aceptar la nación azteca superditarse a los lineamientos exigidos por el Fondo, a cambio de obtener una nueva remesa de créditos equivalentes a 8,840 millones de dólares. La llamada Carta de Intención signada a poco menos de un mes de que De la Madrid ocupara el cargo, obligaba al gobierno mexicano los próximos tres años (1983-1985), a aplicar estas medidas: disminuir el gasto público, limar el endeudamiento externo, incrementar la captación fiscal, eliminar subsidios, congelar los salarios, recortar personal buro-

CUADRO 1

EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN CIFRAS (4)

Producto Interno Bruto (tasa de crecimiento)	-0.6
Inflación (% anual)	98.9
Desempleo abierto (% con relación a la población activa)	8.0
Población Económicamente Activa (millones de personas)	21.4
Déficit de gasto público (2 del Producto Interno Bruto)	17.6
Salario mínimo real (con respecto al índice de precios al consumidor. 1970=100%)	98.0
Deuda externa (miles de millones de dólares)	87.6
Pago de intereses de la deuda externa (m.m.d.)	12.2
Exportaciones (78% petróleo crudo) (m.m.d.)	21.2
Importaciones (m.m.d.)	14.4
Devaluación de la moneda (peso-dólar, 1981=26.20)	148.50
Inversión bruta (miles de millones de pesos)	190.3
Inversión privada (% con relación a 1981)	-17.0
Población (millones de personas)	73.1
Tasa de crecimiento demográfico (%)	2.4

Parte de las expectativas de liquidez gubernamental descansaban en los ingresos petroleros en un monto previsto de 20 mil mdd., pero la caída en el precio del energético implicó

caja". El contrato estipulaba que Pemex (el monopolio petrolero estatal) entregaría un promedio de 110 mil barriles diarios de crudo ligero desde agosto del 82 hasta septiembre

crático, abatir la inflación, reducir el proteccionismo a las importaciones, garantizar márgenes de utilidad a las empresas, disminuir el circulante monetario, elevar la reserva internacional de divisas, libertad cambiaria sin cortapisas, renegociar el débito a plazos más largos a efecto de lograr solvencia financiera, fomentar la reprivatización económica.

Una de las últimas medidas de la gestión saliente lo fue la estatización de la Banca, decretada en septiembre de 1982, decisión espectacular y efectista que contrastó con los criterios arriba señalados.

El sexenio de "El Mundial"

Tal fue el contexto en el que se hizo cargo del Ejecutivo Federal Miguel De la Madrid, situación que justificaba los augurios según los cuales sería él "Presidente de la crisis" y de que el suyo sería un período perdido en la historia de la República, sin no lograba controlar el fenómeno en favor de los intereses de la población mayoritaria. Desde un principio, el nuevo Mandatario se adscribió con entusiasmo a lo pactado con el Fondo, acuerdos que en ningún momento le fueron ajenos ya que había sido el ministro de Programación y Presupuesto durante el sexenio anterior.

El primer afán práctico para detener el severo desajuste financiero se contuvo en el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), expresamente exigido por el FMI al rubricarse la Carta de Intención reñada renglones antes, y puesto en vigencia apenas tomara posesión De la Madrid en diciembre del 82, previa ratificación formal de su parte. Se requería resarcir la capacidad de pago al exterior, lo que tornaba imprescindible elevar los estándares de competitividad respecto al mercado internacional (5). Los objetivos declarados del PIRE puntualizaban abatir la inflación, disminuir el gasto público, proteger el empleo productivo, promover las exportaciones y racionalizar las importaciones, reorientar la política fiscal desgravando a los inversionistas. (6) Otras medidas importantes consistieron en la reprivatización parcial de la banca (en un 34%), la liberalización cambiaria, los propósitos de mayor eficacia empresarial y del sistema financiero en su conjunto. Se trataba de refuncionalizar el aparato productivo con el propósito de incrementar su capacidad generadora de plusvalía, modernizarlo para volverlo competitivo mundialmente pero al precio de deteriorar aún más el nivel de vida de la población.

A finales de mayo del 83, se dió a conocer oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sexenio, el que planteaba la estrategia gubernamental en el mediano y largo plazos (1983-1988). El documento reiteró la aplicación de las "recetas" de estabilización financiera impues-

tas por el FMI e instrumentadas en su primera fase a través del PIRE. Hizo énfasis en que no estaban bajo control de las autoridades mexicanas: caída en el precio del petróleo, alza en las tasas internacionales de interés bancario, proteccionismo arancelario de las naciones desarrolladas. La efectividad presunta de las propuestas contenidas en el PND, descansaba en los avances del PIRE y perfilaba metas concretas que empezarían a cumplirse en 1985, cuando cesara éste, y se desarrollarían a plenitud del '86 al '88. Según análisis, los objetivos implícitos del Plan consistían en "adelgazar" el aparato del gobierno e incrementar la calidad de su intervención económica, a la vez que combatir la corrupción para crear la confianza suficiente entre los capitalistas; fortalecer la integración de la economía mexicana en la mundial, suprimiendo el proteccionismo inveterado y convertir al país en un exportador de productos terminados; elevar el nivel de eficiencia productiva como requisito para acceder a los mercados del orbe. (7) En fin, que para continuar pagado a sus poderosos acreedores urgía actualizar de manera prioritaria los medios de producción. Según el parecer gubernamental, la perspectiva era arribar a la competitividad demostrada por algunas naciones dedicadas a la maquilación de mercancías en el sureste asiático.

Ante los magros resultados para controlar la crisis durante lo primeros tres años y medio, como se verá en la tabla correspondiente, el gobierno adoptó otra estrategia económica, fincada en el Programa de Aliento y Crecimiento, a partir de Junio de 1986. Los ingredientes principales consideraron la renuncia de los bancos y gobiernos acreedores a prestar más recursos a México, el desplome en los precios de los hidrocarburos y la recesión económica propiciada por la política de recortes al gasto público. A mediados de ese mes, el Banco Central daba a conocer una serie de indicadores ominosos que revelaban la profundidad del fenómeno: la deuda interna ascendía ya a 11 billones

de pesos (casi 20 millones de dólares al cambio del momento); un "error" de cálculo en el déficit del gasto corriente por 5 millones de dólares, el fracaso en el saneamiento de las finanzas públicas, el desboque de la inflación, una tasa de desempleo que se aproxima al 18% de la PEA, entre otros. (8).

La gravedad de los acontecimientos orilló a De la Madrid a declarar que la República cumpliría con sus obligaciones financieras pero de acuerdo con la capacidad real de pago, sin ahogar el aparato productivo nacional. Sutilmente dejó entrever la posibilidad de iniciar consultas con otros deudores a fin de negociar en conjunto, y de inmediato cesó a su secretario de Hacienda, quien aspiraba a sucederlo en el cargo como uno de los más viables candidatos. Tal actitud generó al principio desconcierto y acritud en los banqueros, para después hacerse a la idea de arribar a acuerdos negociados evitando así la formación de un club de naciones dispuestas a pronunciarse por la moratoria unilateral; habían entendido el mensaje. Sin aprovechar su nueva posición de fuerza, De la Madrid prefirió conseguir los fondos suficientes a efecto de costear su Programa de Aliento, inspirado éste en las concepciones del secretario del Tesoro norteamericano, James Baker, para quien era vital el crecimiento económico de los deudores y producir un excedente transferible, vía pago de réditos y de capital, a los prestamistas. El llamado Plan Baker prescribía la apertura a la inversión extranjera, el apoyo decidido a la iniciativa privada local, la liberalización de la economía, operar al margen de iniciativas unitarias con otros gobiernos en las mismas condiciones de fuerte endeudamiento, la participación económica estatal limitada: todo ello como condición para obtener nuevos créditos. Tales fueron los criterios que el nuevo programa hizo suyos. Ahora el enemigo a vencer no era el proceso inflacionario sino la recesión.

Así, a principios de julio el nuevo ministro de Hacienda se reunió en Washington con funcionarios finan-

cieros estadounidenses, con el director del FMI, con los presidentes de los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo. Los puntos relevantes de lo tratado ahí se adecuaban al Programa de Aliento: la solución al pago de la deuda debía considerar un crecimiento moderado para México en 1987, y '88; era necesario atenuar los efectos de la caída en el precio del petróleo; se cancelaban las medidas de ajuste económico por ser recesivas, no así las de ajuste fiscal y "estructural"; las variaciones en el precio del energético y su efecto en la economía mexicana tendrían que evaluarse de manera permanente; el análisis del gasto gubernamental había de valorar el comportamiento de la inflación y el saneamiento de las finanzas públicas; se reconocía la obligación de cumplir con el compromiso de la deuda, pero en proporción a la capacidad real de pago; México ingresaría al GATT ese mismo mes.

La puerta quedó abierta a empréstitos adicionales como "paquete de salvación" para la severa insolvencia del país, por un monto cercano a los 7 mil millones de dólares. Había que crecer y seguir pagando.

En vísperas de concluir 1987, ninguno de los intentos mencionados había logrado satisfacer las expectativas que motivaron su diseño, según se aprecia en el cuadro 2, lo que trajo como consecuencia la aplicación de un plan de choque, no reconocido como tal por las autoridades mexicanas, llamada Pacto de Solidaridad Económica, que operó de hecho durante 1988. Se significó por un recorte drástico a los productos subsidiados, menor gasto público, congelación salarial y de precio de básicos, apertura al mercado mundial, venta y supresión de empresas estatales y reprivatización de la economía.

Las predicciones acerca de que De la Madrid sería un sexenio perdido en la historia de la nación parecería haberse cumplido, según se sigue de algunos indicadores hasta 1987, último año considerado pertinente para contextualizar la realización del campeonato futbolístico.



(1) Guillén, Héctor. Orígenes de la crisis en México. Editorial ERA, México, 1984

(2) Ríos, Miguel Ángel. Crisis y reorganización del capitalismo mexicano. Editorial ERA, México, 1986

(3) Ibidem.

(4) Sánchez, Hilda. Crisis y política económica. CIDE, México, 1984.

Alcocer, Jorge. México presente y futuro. Ediciones de Cultura Popular, México, 1985.

Rey, Benito. México 1987: el país que perdimos. Siglo XXI editores, México, 1987.

Revista Expansión, 494, Julio de 1988, México.

Banco de México. Informes anuales (1982-1988). México

(5) Rivera, Miguel Ángel. Opus cit.

(6) Proceso, no. 321.

(7) Proceso, 344.

(8) Proceso, 504.